



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, catorce (14) de octubre de dos mil veinte (2020)

AUTO INTERLOCUTORIO

Magistrado Ponente: Dr. RONALD OTTO CEDEÑO BLUME

MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE:	PEDRO JOAQUIN ARNULFO QUIÑONES Correo: linamarcelacaicedo@hotmail.com
DEMANDADO:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTON PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - UGPP
RADICACIÓN:	76001-23-33-001-2015-00970-00

I.-ASUNTO

Se procede a resolver el recurso de apelación¹ interpuesto por la apoderada judicial de la parte demandante en contra del auto interlocutorio No. 188 del 13 de julio de 2018, a través del cual se declaró la falta de jurisdicción para conocer del presente litigio.

II.-PROVIDENCIA RECURRIDA

A través del auto interlocutorio No. 188 del 13 de julio de 2018², se declaró la falta de jurisdicción para conocer la presente demanda, tras advertirse que al haber desempeñado el actor un cargo que no hace parte de los establecidos en el artículo 5° del Decreto 2123 de 1992, para calificarlo como un empleado público, se consideró que la calidad en el cargo que ocupaba era de trabajador oficial.

Por lo anterior, se indicó que la competencia para conocer el presente asunto le corresponde a la jurisdicción ordinario laboral, según lo dispone el numeral 4° del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011.

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Ahora bien, lo primero que debe señalarse es que conforme el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, el auto que declara la falta de competencia, no es susceptible de apelación.

¹ Folio 331 a 338.

² Folio 329.

Sobre el particular, el Consejo de Estado³ indicó que: “en el asunto bajo estudio la decisión que declara **probada como excepción la falta de jurisdicción, no es susceptible del recurso de apelación**, ello teniendo en cuenta que si bien en principio la providencia que resuelve las excepciones previas es pasible de este medio de impugnación, cuando la determinación del juez es resolverla de manera favorable, no sería procedente este recurso, porque tal como líneas atrás se señaló, lo actuado con posterioridad estaría afectado de nulidad”.

Por lo tanto, es claro que no procede el recurso de apelación contra el auto interlocutorio No. 188 del 13 de julio de 2018, que declaró la falta de jurisdicción. No obstante, en virtud del parágrafo del artículo 318 del Código General del Proceso, al escrito presentado por la parte actora se le dará el trámite del recurso procedente, esto es, el de reposición, mismo que al tenor de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley 1437 de 2011 y el ya citado artículo 318 del Código General del Proceso, fue presentado oportunamente.

Se tiene entonces que, la apoderada judicial de la parte actora sustenta su recurso indicando que el actor cumplió con el tiempo de servicio exigido por la Ley 33 de 1985 y que para la entrada en vigencia del Decreto 2123 de 1992, había completado la mayor parte del tiempo de servicio como empleado público.

Aduce que el Decreto 2123 de 1992, aunque modificó la condición de empleados públicos, dispuso que el tipo de vinculación de sus servidores no se alteraría y por ende, se les mantuvo su régimen salarial, prestacional y asistencial, de forma tal que, según manifestó, la legalidad del acto demandado debe ser estudiado a través de esta jurisdicción y por lo tanto, considera que su derecho pensional se consolidó en calidad de empleado público⁴.

IV. CONSIDERACIONES

En reciente pronunciamiento, el Consejo de Estado⁵ sobre la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa para conocer de asuntos de reconocimientos pensionales de servidores del extinto **TELECOM**, indicó:

“ (a). A partir del 29 de diciembre de 1992 TELECOM se sometió al régimen jurídico propio de una empresa industrial y comercial del Estado lo que implicó para sus empleados una transformación sustancial en las relaciones laborales, toda vez que, por regla general, los servidores vinculados a ella tendrían el carácter de trabajadores oficiales.

(b). Con el Decreto 2123 de 1992 en el que se dispuso que serían empleados públicos quienes desempeñaran las funciones de presidente, vicepresidente,

³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero ponente: **WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ**, providencia del 17 de mayo de 2019, radicación número: 76001-23-33-000-2015-01139-01(2371-18).

⁴ Folios 331 a 338.

⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero ponente: **GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ**, providencia del 7 de mayo de 2020, radicación número: 76001-23-33-000-2013-00192-02(0980-19).

MEDIO DE CONTROL:	REPARACIÓN DIRECTA
RADICACIÓN:	76001-23-33-001-2015-000970-00
DEMANDANTE:	PEDRO JOAQUIN ARNULFO QUIÑONEZ
DEMANDADO:	UGPP

secretario general, director de oficina, director del Instituto Tecnológico de Capacitación, ITEC, gerente de servicio, gerente regional, asistente y jefe de la división, los demás funcionarios vinculados a la planta de personal a la fecha de reestructuración de la empresa pasaron a ser automáticamente trabajadores oficiales.

Asimismo, en los estatutos de la empresa, adoptados por la junta directiva y aprobada según Decreto 666 de abril 5 de 1993 se hizo la clasificación, disponiendo que serían empleados públicos las personas que desarrollaran funciones de dirección y confianza en los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, Secretario General, Director de Oficina, Director del Instituto Tecnológico de Electrónica y Comunicaciones, ITEC, Gerente de Servicios, Gerente Regional, Asistente y Jefe de División; en dichos cargos no figura el de Profesional V desempeñado por el demandante.

(c) Dada la naturaleza del cargo de Profesional V, le «corresponden funciones cuya naturaleza demanda la aplicación de los conocimientos propios de una carrera profesional universitaria, reconocida por la ley»; es decir, no desarrollan funciones del nivel directivo o asesor como son las de dirección, coordinación y control de cada una de las dependencias encargadas de ejecutar y desarrollar las políticas, planes y programas de la empresa, ni de asistencia y consejo directo a los funcionarios que encabezan la Dirección General de la Empresa, sino simplemente la de un área específica de conocimiento. En esa medida no podía ser considerado como un empleado público.

Con base en los anteriores razonamientos, esta Sala considera que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el señor Harold Humberto Agudelo Chaparro con el fin de obtener la nulidad del Oficio SP-AP-11078 de 8 de noviembre de 2012, no puede ser objeto de conocimiento por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en razón a la naturaleza jurídica del cargo de trabajador oficial que ostentaba el demandante, lo cual excluye la posibilidad de efectuar algún pronunciamiento por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (...).

En este punto, es necesario señalar que la condición de trabajador oficial resulta absolutamente relevante, en tanto es el elemento que define la jurisdicción competente para desatar la controversia" (Negrilla fuera de texto).

Así las cosas, siguiendo los lineamientos establecidos en la jurisprudencia antes referenciada y tal como se indicó en la providencia objeto de recurso, al haberse desempeñado el señor **PEDRO JOAQUIN ARNULFO QUIÑONEZ** como operador teleprintista I en la División Técnico – Operativa Cali Sede Gerencia en la **EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -TELECOM**⁶, es decir, en un cargo que no se encuentra dentro de los establecidos en el artículo 5º del Decreto 2123 de 1992, para ostentar la calidad de empleado público, se entiende que la naturaleza jurídica del cargo que desempeñaba el actor era de trabajador oficial y por ende, no le corresponde a esta jurisdicción el estudio de fondo del presente asunto.

⁶ Folio 50.

MEDIO DE CONTROL:	REPARACIÓN DIRECTA
RADICACIÓN:	76001-23-33-001-2015-000970-00
DEMANDANTE:	PEDRO JOAQUIN ARNULFO QUIÑONEZ
DEMANDADO:	UGPP

Así las cosas, se reitera entonces que esta Corporación carece de jurisdicción para conocer de la presente controversia, pues es competencia de la jurisdicción ordinaria laboral resolver el asunto objeto de litigio.

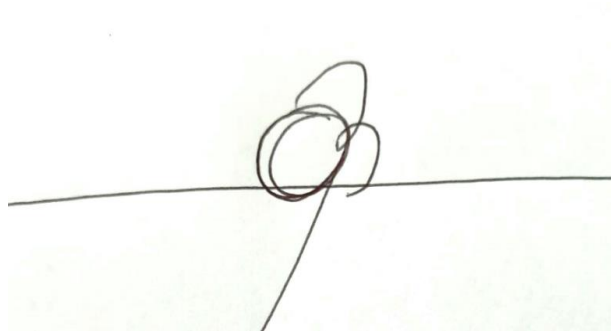
Por lo expuesto, el Despacho,

RESUELVE

PRIMERO: **NO REPONER** el auto interlocutorio No. 188 del 13 de junio de 2018, a través del cual se declaró la falta de jurisdicción, conforme se indicó en precedencia.

SEGUNDO: Una vez quede en firme la presente decisión, remítase el expediente, de forma **INMEDIATA** por intermedio de la Secretaría de esta Corporación, a los Juzgados Laborales del Circuito Judicial de Cali (Reparto).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above a solid horizontal line.

RONALD OTTO CEDEÑO BLUME
Magistrado